

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Luis Bernardo Muñoz Bedoya
DEMANDADO	Inmobiliaria el Cóndor S.A.S
LITISCONSORTE NECESARIO POR PASIVA	John Fernando Vásquez Fernández
PROCEDENCIA	Juzgado 01 Laboral del Cto. de Bello
RADICADO	05088 3105 001 2018 00381 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 238 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	Declaratoria de existencia de contrato con la inmobiliaria – pago de prestaciones sociales – indemnización por despido injusto – vicios en la firma de la carta de renuncia
DECISIÓN	Adiciona y confirma

En la fecha, **veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte actora, con relación a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello, dentro del proceso ordinario promovido por **Luis Bernardo Muñoz Bedoya**, en contra de la **Inmobiliaria el Cóndor S.A.S**, al cual se vinculó como litisconsorte necesario por pasiva a **John Fernando Vásquez Fernández**. Radicado único nacional 05088 3105 **001 2018 00381** 01.

La Magistrada ponente, con fundamento en lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio del año en curso, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado

mediante acta **Nº. 032**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

El demandante, por conducto de apoderada, solicita se declare que entre él y la Inmobiliaria el Cóndor, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 18 de enero y el 24 de septiembre de 2016, fecha en la cual finalizó de manera unilateral y sin justa causa, en consecuencia, se condene a cancelarle la indemnización por despido injusto, así como la liquidación definitiva de prestaciones sociales, sanción moratoria del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por no consignación de cesantías en el respectivo fondo, y la del artículo 65 del C.S.T. Pide también costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones manifestó que fue contratado de manera verbal por la Inmobiliaria el 18 de enero de 2016, para desempeñar el cargo de oficial de construcción en el proyecto Praga en el Municipio de Bello, con un salario de \$1.520.000,00; que Rene Posada, encargado de la obra le hizo firmar varios documentos sin permitirle leerlos, ni obtener copia; que la relación se mantuvo hasta el 24 de septiembre de 2016, fecha en la cual, Rene Posada, le dio por finalizado el contrato de manera unilateral, sin que al 28 de mayo de 2018, le hayan pagado las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, y vacaciones causadas durante la vigencia de vínculo, así como tampoco la indemnización por despido injusto.

El 25 de junio de 2018, se admitió y se le ordenó darle trámite a la acción, debidamente enterada la Inmobiliaria el Cóndor S.A.S., procedió a dar respuesta, aceptando el hecho de que no le canceló al actor ningún

tipo de prestación social, ni vacaciones, ni indemnización, por no haber tenido ningún vínculo con el mismo, al no haberle prestado nunca sus servicios, no estuvo subordinado, por lo que mal haría en finalizar una relación inexistente. Frente a los restantes supuestos afirma que no son ciertos, explicando que la sociedad celebró contrato de obra con el señor John Fernando Vásquez Fernández, para la construcción de un proyecto de obra civil denominado Praga, siendo este, de acuerdo a la documental aportada, el que vinculó al actor mediante convenio a término fijo inferior a un año, cancelándosele todos los salarios y prestaciones sociales, finalizando el mismo por renuncia voluntaria exteriorizada por el señor Muñoz. Asevera que el señor René Posada, no estaba encargado de ninguna obra, al dedicarse solo a suministrar los materiales necesarios para que se llevara a cabo el proyecto. **Presentó oposición a la prosperidad de las pretensiones**, y propuso como medios exceptivos, el de inexistencia del contrato de trabajo, falta de causa para pedir, y pago.

En providencia del 6 de mayo de 2021, el juzgado de conocimiento, atendiendo la prueba documental allegada con la contestación de la demandada y el contenido de la misma, dispuso integrar como Litisconsorte necesario por pasiva a **John Fernando Vásquez Fernández**, quien, una vez notificado procedió a dar respuesta, esgrimiendo no constarle ninguno de los hechos, por lo que se deben probar, no obstante, asegura que celebró contrato de ejecución de obra civil con la Inmobiliaria el Cóndor, el 20 de febrero de 2016, y en virtud de ello requirió los servicios del señor Bernardo, vinculándolo mediante contrato a término fijo inferior a un año, con una duración de 7 meses, para desempeñar la función de oficial de construcción, con un salario de \$1.520.000,00, iniciando labores el 25 de febrero y finalizando el 24 de septiembre de 2016, por renuncia libre y voluntaria presentada por el

señor Bernardo, procediéndose con la liquidación de prestaciones sociales. Finalmente adujo que la Inmobiliaria el Cóndor nunca fue la empleadora directa del actor bajo ninguna modalidad contractual, pues, lo que ocurrió fue que, en virtud de la estipulación de obra acordada con esta, vinculó al señor Bernardo. **Resistió las pretensiones**, y formuló las excepciones de inexistencia de obligación laboral, falta de interés jurídico y falta de legitimación en la causa por activa.

La primera instancia terminó con **sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello**, en la que declaró que entre el señor Bernardo Muñoz Bedoya y John Fernando Vásquez Fernández, existió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, del 25 de febrero al 24 de septiembre de 2016, devengando un salario de \$1.520.000,00, el cual finalizó por renuncia del trabajador. Absolvió al señor John Fernando Vásquez y a la Inmobiliaria el Cóndor S.A.S. de las pretensiones. Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación e impuso costas al actor en favor de la demandada.

Argumentó el fallador, después de citar el contenido del artículo 23 y 24 del C.S.T., y hacer un relato de la prueba aportada al proceso, que la Inmobiliaria el Cóndor fungió como una simple beneficiaria de la obra en razón al contrato suscrito con el señor Fernando Vásquez, aceptándose por parte de este la existencia del vínculo con el demandante, sin acreditarse supuesto diferente, relación que se dio entre el 25 de febrero y el 24 de septiembre de 2016, data está en la que el actor presentó renuncia voluntaria, y donde fueron canceladas las prestaciones sociales y vacaciones, atendiendo el salario realmente convenido de \$1.520.000,00, sin que exista fundamento para condenar al pago de la misma, así como a la indemnización por despido injusto, sanción por no pago de prestaciones a la terminación del vínculo, e indemnización por no

consignación de cesantías, pues, atendiendo el periodo de duración de la relación, las mismas debían ser entregadas al actor al momento de la finalización del vínculo, como efectivamente ocurrió.

Inconforme con la anterior decisión **la apoderada de la parte actora interpuso recurso de apelación**, solicitando se concedan las pretensiones elevadas, argumentando para ello que la Inmobiliaria el Cóndor se contradice en el transcurso del proceso, pues, de una parte afirma que nunca existió contrato de trabajo y por otra afilia al actor a la seguridad social, a más que efectúo el reporte del accidente de trabajo a través del señor Cesar, quien estaba a cargo de la obra, y manifestó ser empleado de la misma, evidenciándose con ello, con la primacía de la realidad sobre las formas, y con la demostración de los elementos del contrato, prestación personal del servicio, cumplimiento de órdenes, y percibir remuneración, la existencia del vínculo con dicha compañía.

Precisa que al demandante, se le hizo firmar una carta de terminación del contrato con posterioridad a la fecha en la que se efectúo el retiro del sistema de seguridad social, supuesto que da cuenta de la intención de la empresa de finiquitar el vínculo, y la existencia de mala fe.

Si bien la apoderada del demandante presenta escrito manifestando que *"interpongo recurso de apelación contra la sentencia emitida el 22 de septiembre de 2022"*, el mismo se tomara como alegatos de conclusión, que es lo pertinente en el procedimiento laboral. Afirma la profesional que firmó documentos sin saber el acto que estaba realizando, sumado a que no le dieron copia de estos, por tal, dicho proceder se enmarca dentro de la mala fe. Que el juez de conocimiento no permitió que se tuviera como testigo al señor Víctor Gallego, compañero de trabajo, y quien podía dar fe de la existencia del contrato, debiéndose considerar que el deponente

que llevó la demandada, confesó que en el momento del accidente que padeció, en el lugar de trabajo, fue él mismo, quien realizó el reporte.

Manifiesta que, la decisión de primera instancia, desvirtúa la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, y la teoría de las obligaciones, por lo que solicita se le de aplicación al principio de la realidad sobre las formas, valorándose las pruebas allegadas al proceso, entre ellas, la historia laboral, la cual da cuenta de la relación con Inmobiliaria el Cóndor.

Por último, aduce que para el caso se presentó un despido indirecto, el cual se debió al acoso y explotación del cual venía siendo víctima, pues, Fernando Velásquez, lo obligaba a firmar documentos sin la oportunidad de leerlos y le decía *"firme rápido que tiene que hacer y si no le gusta se puede largar por donde entro"*, supuesto que constituye un abuso, sumado a que el día en que sufrió un accidente en el ojo, lo obligaron a seguir trabajando.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Como hechos debidamente acreditados en los autos, se tiene que el 20 de febrero de 2016, John Fernando Vásquez Fernández como contratista, y la Inmobiliaria el Cóndor S.A.S., como contratante, efectuaron acuerdo, cuyo objeto era llevar a cabo la dirección y ejecución de la obra denominada Praga, estableciéndose como obligaciones del contratista, en la cláusula 5 *"contratar el personal idóneo para la ejecución de la obra con la absoluta autonomía, a su vez este personal estará a su cargo y responsabilidad"* así mismo se determinó *"el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA ocupe en la obra serán de cargo exclusivo de este."*

EL CONTRATISTA deberá exhibir al CONTRATANTE las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales a solicitud del CONTRATANTE”, así como que “EL CONTRATANTE afiliará a las entidades de seguridad social como ARL, EPS, IPS, AFP, CAJAS DE COMPENSACION, entre otras, a los trabajadores del CONTRATISTA, con el único fin de garantizar a este personal el derecho a la seguridad social; para cumplir tal fin en cada corte de obra el CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE una relación de los trabajadores que tenga a su cargo y el valor de estas afiliaciones las podrá descontar el CONTRATANTE de los pagos que se le hagan al CONTRATISTA en cada corte de obra. Lo anterior sin que se genere una relación laboral entre el CONTRATANTE y los trabajadores del CONTRATISTA”; el señor John Fernando Vásquez Fernández, suscribió con el señor Luis Bernardo Muñoz Bedoya, contrato de trabajo a término fijo por 7 meses, iniciando el 25 de febrero y venciendo el 24 de septiembre de 2016, data esta última en la que el señor Luis Bernardo manifestó ante el señor John Fernando e Inmobiliaria el Cóndor:

Yo **LUIS BERNARDO MUÑOZ BEDOYA** con C.C. **8.400.655** de BELLO (ANT) certifico que los señores: John Fernando Vásquez Fernández con c.c. 71.627.253 de Medellín (contratista) y la inmobiliaria El Cóndor S.A.S con nit: 900425447-8 (contratante), el primero contratista y el segundo como contratante del contratista, propietario del bien inmueble ubicado en la Cra 56B N° 42-59 Del municipio de Bello, Se encuentra a paz y salvo por todo concepto específicamente relacionado con la seguridad social y sus obligaciones laborales, toda vez que mi remuneración desde el ingreso a la empresa hasta mi retiro, ha sido cancelada en razón de salarios, liquidación de prestaciones sociales y pago de seguridad social, al momento de la presentación de mi renuncia, la cual ha sido libre y obedece a razones personales. Dicha renuncia al cargo corresponde a la fecha actual.

La Sala centrará su estudio en los puntos que fueron objeto de recurso de alzada al tenor de la directriz que para estos efectos traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, no a aquellos contenidos en los alegatos de conclusión, pues, no le es dable a las parte pretender que los argumentos planteados en tal etapa, subsanen de alguna manera cualquier posible deficiencia existente al momento de interponer y sustentar el recurso vertical, en tanto, el principio de consonancia previsto en el artículo 66A del CPTSS limita el pronunciamiento de segundo grado a los temas planteados en la apelación (SL4397-2015 y SL9518-2015), adicional a que los alegatos de

conclusión se convierten en la oportunidad para que los apoderados planteen la teoría del caso desde la óptica de quien los presenta, de acuerdo al debate probatorio, trámite procesal y a los puntos objeto de inconformidad planteados en el recurso, sin que se puedan ampliar o adicionar aspectos no manifestados en forma oportuna. Sobre el particular la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en providencia del 09 de febrero de 2017, proceso con radicación, 66001-23-33-000-2016-00080-01, explicó:

... la Sala encuentra necesario precisar que los argumentos esgrimidos por la parte demandada en los alegatos de conclusión constituyen verdaderos reparos contra la sentencia impugnada que no pueden ser tenidos en cuenta por las siguientes razones: (i) Los alegatos de conclusión constituyen la oportunidad procesal otorgada a las partes para que, si a bien lo tienen, manifiesten sus impresiones respecto de lo ocurrido en el trasegar de la instancia correspondiente. En ese sentido, es la oportunidad para expresarle al juez cuál debe ser, en su sentir, la conclusión a la que se debe llegar luego de analizar los fundamentos de hecho, de derecho, y el acervo probatorio, sin que sea posible a esas alturas del proceso traer nuevos cargos o solicitar nuevas pruebas. (ii) Si se abre la posibilidad de que las partes usen los alegatos de conclusión para adicionar los cargos de la demanda o los fundamentos de la apelación, se vería comprometido el debido proceso como quiera que la otra parte o incluso los terceros vinculados al proceso no tendrían oportunidad de oponerse a esos nuevos argumentos. No puede perderse de vista que el proceso está diseñado de tal manera que cada etapa obedece a una estructura lógica tendiente a garantizar los derechos de las partes y a permitirle al juez que adopte una decisión de fondo. Así, los nuevos argumentos introducidos por el demandado en los alegatos de conclusión relativos a que la sentencia impugnada no tuvo en cuenta su conducta escapan al estudio de esta instancia como quiera que no fueran planteados en el recurso de apelación.

De acuerdo con ello, atendiendo los planteamientos de la demanda, de la apelación y lo debatido en el trámite, le corresponde a esta instancia determinar si están demostrados los elementos para declarar la existencia de vínculo laboral entre el demandante y la Inmobiliaria el Cóndor, de obtenerse respuesta afirmativa, se procederá al análisis de la prosperidad o no de cada uno de los conceptos reclamados, así mismo se analizará si la finalización del vínculo se dio o no de manera unilateral y sin justa

causa, al esgrimirse por el actor que fue puesto a firmar la carta de finalización.

Pues bien, sea lo primero recordar que a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo, los juzgadores pueden formar libremente su convencimiento *"inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes"* (Sentencia SL4035-2021, SL4096-2021, donde se reitera lo expuesto en la SL15058-2017).

Así las cosas, si bien el artículo 60 del C.S.T y la S.S impone la obligación de analizar todas las pruebas oportunamente allegadas, los juzgadores están facultados para darle mayor valor a cualquiera de ellas sin sujeción a la tarifa legal, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad *ad substantiam actus*, pues en esa eventualidad *"no se podrá admitir su prueba por otro medio"*. (sentencia SL4514-2017).

En este orden, el juez no está sujeto a tarifa legal de pruebas y, por lo tanto, formará libremente su convencimiento con base en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes.

De acuerdo con ello, debe decirse que para efectos de establecer la existencia de una relación laboral, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, ha indicado de manera pacífica y reiterada que resulta indispensable que se acredite la prestación personal del servicio por quien alega ser trabajador, explicándose en la sentencia SL4518-2021 al citar la SL16528-2016, que:

"Para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral." (Subraya intencionales de la Sala)

Así entonces, afirmando el demandante la existencia de vínculo laboral con la Inmobiliaria el Cóndor S.A.S., era su carga acreditar los supuestos para la configuración del mismo en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, siendo relevante el referido a la prestación personal del servicio, pues con este entra a operar la presunción de contrato de trabajo contemplada en el artículo 24 de la misma obra, como una ventaja probatoria a favor de la parte más débil de la relación laboral, que puede ser desvirtuada por la contraparte, demostrando que se trata de un vínculo regido por norma disímil o que el mismo no se dio.

Lo anterior significa, que al demandante le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la parte demandada a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción, lo que se traduce en un traslado de la carga probatoria, demostrando que la actividad contratada se ejecutó o realizó en forma autónoma, totalmente independiente y no subordinada, bajo un nexo distinto del laboral, sin que ello se torne en una prueba diabólica. Sobre el particular véase la sentencia SL4027-2017 y SL 365 de 2019.

Esto en virtud del principio de la carga de la prueba o autoresponsabilidad, consagrado en los artículos 164 y 167 del C.G.C,

aplicables por remisión normativa del artículo 145 del C.P.T. y S.S; es así como las partes están obligadas a probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas que consagran el derecho que reclaman, manteniendo la obligación de aportar los soportes en que basan sus afirmaciones, con las cuales pretenden se les reconozca un derecho, la aplicación de una norma, o un efecto jurídico particular; el no hacerlo conlleva inexorablemente a la negativa de éstos.

En desarrollo de tales preceptos normativos, la jurisprudencia especializada en sentencia del 25 de octubre de 2011, radicado 37547 sostuvo:

"(...)La Sala considera que el Tribunal no distorsionó el verdadero sentido de la regla de juicio de la carga de la prueba, contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil –aplicable al procedimiento del trabajo y de la seguridad social, merced a lo dispuesto en el artículo 145 del estatuto de la materia-, porque la carga de la prueba del tiempo servido por el trabajador al empleador la soporta el primero, de modo que la falta de demostración del tiempo de servicios comporta que no hay posibilidad para condenar al pago de prestaciones, salarios e indemnizaciones."

Y es que contrario a lo insistentemente afirmado por la apoderada del demandante al fundamentar la alzada, **no es posible relevarlo de la carga probatoria de los supuestos de hecho en que funda sus pretensiones**, habida cuenta que es sabido, que quien pretende un derecho tiene la carga de probar los hechos que lo producen, pues *de antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado.* (Sentencia CSJ SL, 22 abril 2004, rad. 21779)

Puestas de esta manera las cosas, se tiene, que en el escrito de demanda

se afirma por el trabajador que su vínculo laboral con la empresa convocada por pasiva inició el **16 de enero de 2016**, no obstante, no trae ningún medio de convicción que acredite su dicho, y pese a que le fue decretada prueba testimonial, se desistió de la misma, y el único declarante allegado al plenario, Carlos Andrés Jiménez, manifestó que conoció a Bernardo porque fue uno de los trabajadores de Fernando, en la obra Praga del Municipio de Bello, sin recordar cuando inició y finalizó la relación laboral que ligó a estos, pero sí que era Fernando el encargado de direccionar a los trabajadores, así como de pagar los salarios, sumado a que indicó de manera contundente que el personal tenía contrato directo con Fernando y no con la Inmobiliaria, existiendo convenio para el pago de la seguridad social.

De acuerdo con los medios de convicción obrante en el plenario, se tiene que no se encuentran elementos que demuestren que efectivamente se dio una relación laboral entre el señor Bernardo y la Inmobiliaria, y si bien no se desconoce lo expuesto en el recurso de alzada, esto es que aparecen cotizaciones al sistema efectuadas por dicha entidad, esto no conduce a tener por probada la prestación personal del servicio, tal y como fue expuesto por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en el sentencia SL4697-2021, donde explica:

*"En efecto, de la historia laboral expedida por Colpensiones, que la censura aduce no fue analizada, no puede derivarse equívoco del sentenciador, no solamente porque dicha prueba no es apta en sede extraordinaria -debido a que el ISS no es parte del proceso- sino también porque **de tiempo atrás se ha establecido que aquella tan solo acredita los aportes del trabajador al sistema de seguridad social y, por lo mismo, no demuestra la existencia de una relación laboral o la ausencia de esta en un determinado tiempo.**"* (Resaltos intencionales de la Sala)

Súmese a ello que en el contrato de obra celebrado entre Fernando Vásquez y la Inmobiliaria el Cóndor, se dejó sentado que el primero como contratista, se obligaba a "*contratar el personal idóneo para la ejecución de la*

*obra con la absoluta autonomía, a su vez este personal estará a su cargo y responsabilidad" y a realizar el "pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA ocupe en la obra serán de cargo exclusivo de este. EL CONTRATISTA deberá exhibir al CONTRATANTE las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales a solicitud del CONTRATANTE" y que el contratante "afiliará a las entidades de seguridad social como ARL, EPS, IPS, AFP, CAJAS DE COMPENSACION, entre otras, a los trabajadores del CONTRATISTA, con el único fin de garantizar a este personal el derecho a la seguridad social; para cumplir tal fin en cada corte de obra el CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE una relación de los trabajadores que tenga a su cargo y el valor de estas afiliaciones las podrá descontar el CONTRATANTE de los pagos que se le hagan al CONTRATISTA en cada corte de obra. **Lo anterior sin que se genere una relación laboral entre el CONTRATANTE y los trabajadores del CONTRATISTA."***

Atendiendo a lo expuesto, se debieron allegar otros medios de convicción tendientes a demostrar la existencia de la prestación personal del servicio en favor de la Inmobiliaria, y no del señor Fernando Vásquez, que es lo acreditado dentro del plenario tal y como lo concluyó el juez de instancia, por lo que no hay lugar a predicar relación laboral e imponer el pago de obligaciones de tal naturaleza a la Inmobiliaria, por lo que habrá de confirmarse la decisión en este apartado

Finalmente, frente a la finalización del vínculo por decisión unilateral, en su sentir, sin justa causa, proveniente del empleador, por haberse obligado a firmar la carta de renuncia, es de recordarse que según el artículo 1502 del Estatuto Civil, el consentimiento constituye un elemento esencial de todo acto jurídico y se exige para que una persona se obligue con otra, entendiéndose como la manifestación de la voluntad personal del agente para celebrar un acto jurídico; pudiéndose inferir de los artículos 1508 y ss del mismo estatuto, que

este debe estar libre de todo vicio, es decir, de error, fuerza o dolo, ya que su incidencia comprobada genera la nulidad.

La existencia del vicio fuerza, está regulado en el artículo 1513 C.C., advirtiéndolo que éste: *no vicia el consentimiento sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento”.*

La fuerza debe ir dirigida a obtener de la persona forzada su participación en la celebración de un acto jurídico no deseado por él, o deseado en condiciones diferentes, sin estar dentro de esta, el simple temor reverencial.

Sobre el tema, la C. S. de J., Sala de Casación Laboral en sentencia Nro. 19812 del 4 de febrero de 2003, MP German Valdés Sánchez, expresó que: *"En todo caso debe afirmarse que el error, la fuerza y el dolo, no surgen en abstracto, sino que deben provenir de hechos que de manera clara afecten el consentimiento de modo que, de no existir ellos, la declaración de voluntad no se habría emitido."*

En el mismo sentido, en sentencia SL572-2018, la Corte reiteró: **"...Frente a los vicios del consentimiento, esta Corporación en su jurisprudencia ha sostenido que no se pueden presumir por el juez laboral sino que deben estar suficientemente acreditados dentro del juicio, en el entendido de que "...con arreglo a los arts. 1508 a 1516 del C.C, el error, la fuerza y el dolo como vicios del consentimiento capaces de afectar las declaraciones de voluntad, no se presumen, deben acreditarse plenamente en el proceso"** (sentencias SL16539-2014, SL10790-2014 y SL13202-2015)"

En el presente asunto, se advierte carta del 24 de septiembre de 2016, en la que el actor manifestó:

Yo LUIS BERNARDO MUÑOZ BEDOYA con C.C. 8.400.655 de BELLO (ANT) certifico que los señores: John Fernando Vásquez Fernández con c.c. 71.627.253 de Medellín (contratista) y la inmobiliaria El Cóndor S.A.S con nit: 900425447-8 (contratante), el primero contratista y el segundo como contratante del contratista, propietario del bien inmueble ubicado en la Cra 56B N° 42-59 Del municipio de Bello, Se encuentra a paz y salvo por todo concepto específicamente relacionado con la seguridad social y sus obligaciones laborales, toda vez que mi remuneración desde el ingreso a la empresa hasta mi retiro, ha sido cancelada en razón de salarios, liquidación de prestaciones sociales y pago de seguridad social, al momento de la presentación de mi renuncia, la cual ha sido libre y obedece a razones personales. Dicha renuncia al cargo corresponde a la fecha actual.

Al analizar el contenido de dicha comunicación, la Sala encuentra que tal acto jurídico emanó de su voluntad libre, pues no existe en el plenario ningún medio probatorio que dé cuenta que aquella manifestación se hizo bajo amenazas o presiones de su empleador, por lo que tal situación no pasa de ser una afirmación del demandante sin comprobación objetiva, y es que si bien el señor Bernardo pudo no elaborado la carta, ello por sí sólo no configura la existencia de un vicio que afectara su consentimiento, pues se reitera, no se probó fuerza o coacción alguna para la presentación de la renuncia, sumado a que, para que este se configure debe tratarse de un acto de violencia tal que infunda en el trabajador un justo temor de verse expuesto a un mal irreparable y grave; lo que se insiste no quedó acreditado, resultando plenamente válida la manifestación de voluntad –renuncia- hecha por el demandante, surtiendo plenos efectos jurídicos, y si bien se avizora, que el actor fue desafiliado del sistema de pensiones para el 1º de septiembre de 2016, cuando la relación laboral con el señor Fernando se estableció que finalizó el 24 del mismo mes y año, esto por sí solo no prueba o presume un vicio, así como la intención del empleador de terminar la relación desde antes, pues, lo que queda claramente establecido es la renuncia libre efectuada por el señor Bernardo Muñoz.

Ahora, no pueden pasarse por alto las obligaciones que derivan para el empleador de conformidad con los artículos 15, 17 y 33 de la Ley 100 de 1993, así como también al tenor de lo explicado, entre muchas otras, en la sentencia SL3009-2017, por lo que establecida la relación laboral hasta

el 24 de septiembre de 2016, le corresponde al señor John Fernando Vásquez Fernández, realizar el pago de los aportes a seguridad social entre el 1º y el 24 de septiembre de 2016, para el efecto se tendrá en cuenta el salario devengado, esto es, \$1.520.000,00, punto en el que se adiciona la sentencia, ello al haberse omitido la cotización del empleador al sub sistema pensional por dicho lapso.

Costas en esta instancia a cargo del demandante, inclúyanse como agencias en derecho en favor de la Inmobiliaria el Cóndor S.A.S., la suma de \$200.000,00.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **adiciona** la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello dentro del proceso ordinario promovido por **Luis Bernardo Muñoz Bedoya**, en contra de la **Inmobiliaria el Cóndor S.A.S**, donde se vinculó como litisconsorte necesario por pasiva a **Jhon Fernando Vásquez Fernández**, para ordenarle al señor **Jhon Fernando Vásquez Fernández**, que realice el pago de la reserva actuarial que determine la entidad de seguridad social en pensiones Colpensiones, por el lapso comprendido entre el 1 y el 24 de septiembre de 2016, para el efecto se tendrá en cuenta el salario devengado, esto es, \$1.520.000,00.

En lo demás se confirma la decisión.

Costas en esta instancia a cargo del demandante, inclúyanse como agencias en derecho en favor de la Inmobiliaria el Cóndor S.A.S., la suma de \$200.000,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado